

# Los «Procesos integracionistas» de nuestra América: Una mirada a algunas de sus tendencias centrífugas

Luis Suárez Salazar \*

---

*Aportes*, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año XVIII, Número 49, Septiembre - Diciembre de 2013

Refiriéndose a las posibilidades (fortalezas y oportunidades) del llamado «nuevo regionalismo» latinoamericano y caribeño, el artículo acentúa algunas de las «tendencias centrífugas» endógenas y exógenas que han dificultado y, en algunos casos, impedirán la profundización de los diversos, superpuestos y a veces contrapuestos proyectos de concertación política, cooperación e integración económica que en la actualidad se están desplegando en América Latina y el Caribe. Desde un rápido recorrido lógico-histórico acerca de esas tendencias centrífugas, se focalizan las diversas «estrategias inteligentes» desplegadas por los gobiernos de los Estados Unidos durante la «primera presidencia» de Barack Obama, en consuno con sus diversos y asimétricos aliados hemisféricos y extrahemisféricos, estatales y no estatales. El artículo concluye indicando que esas estrategias se mantendrán durante la segunda y última administración de ese mandatario estadounidense; lo que en los próximos años le planteará nuevos desafíos a la profundización de todos aquellos proyectos de concertación política, cooperación e integración económica contrarios a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de la llamada «potencia hegemónica en el hemisferio occidental», cuales son los casos del ALBA-TCP, del MERCOSUR (ampliado), al igual que de la UNASUR y la CELAC.

*The 'integration processes' of our America: a look at some of its centrifugal tendencies.*

*Referring to the possibilities (strengths and opportunities) of the Latin American and Caribbean «new regionalism», the article emphasizes some of the endogenous and exogenous «centrifugal tendencies» that have hindered and, in some cases, will prevent the deepening of the diverse, overlapping and sometimes conflicting political cooperation projects, cooperation and economic integration that are currently being undertaken in Latin America and the Caribbean. From a quick logical - historical tour about these centrifugal trends, are focalized the the various «smart strategies» deployed by the governments of the United States during the «first presidency» of Barack Obama, along with its diverse asymmetric hemispheric and extra-hemispheric, state and non-state allies. The article concludes that these strategies will be maintained during the second and final administration of the U.S. president, which in upcoming years will pose new challenges to the deepening of all projects for political cooperation, economic cooperation and integration in respond to the geo-economic and geopolitical interests of the called «hegemonic power in the Western Hemisphere,» which are the cases of ALBA -TCP, MERCOSUR (extended), as UNASUR and CELAC.*

\* Profesor del Centro de Investigación de Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de la Habana.

### *Introducción*

Este escrito actualiza y amplía los contenidos de mi ensayo «Los proyectos integracionistas del Gran Caribe: una mirada al escenario más probable» presentado, como ponencia, en el Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), realizado en Tegucigalpa, Honduras, a fines de agosto del 2012 y publicado casi un año después como epílogo del libro *El Gran Caribe en el Siglo XXI: Crisis y respuestas* recientemente publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2013).

Las posibilidades de retomar las ideas planteadas en ese y otros trabajos previamente publicados (Suarez, 2011, 2011a, 2011b, 2011c), están dadas porque, sin desmeritar las positivas *tendencias centrípetas* que se observan en la actualidad —como las que se han puesto en evidencia en la institucionalización y profundización de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP), de PETROCARIBE, de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, más recientemente, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

(CELAC)—, en las páginas que siguen se acentuarán algunas de las *tendencias centrífugas* que han gravitado y, en el futuro previsible, seguirán gravitando negativamente sobre los diversos, superpuestos y, a veces, contrapuestos proyectos de concertación política, cooperación funcional y/o integración económica que, bajo la definición genérica de «procesos integracionistas», actualmente se desenvuelven en el espacio geográfico, humano y cultural que en la última década del siglo XIX José Martí denominó *Nuestra América*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Como seguramente conocen los lectores, en el lenguaje de la física se emplea el término «fuerzas centrífugas» para definir a aquellas que se aleja del centro o tiende a alejarse de él. A su vez, se llaman «centrífugas» a aquellas máquinas que, por medio de la fuerza, separan los distintos componentes de una mezcla. Esas actúan en sentido contrario a las «fuerzas centrípetas»: las que propician un movimiento hacia «el centro» o aglutinador de los distintos componentes de una mezcla. En la geografía política se ha venido reconociendo la existencia de fuerzas y tendencias centrípetas y centrífugas. Las primeras tienden a la unión de estados en unidades geopolíticas más amplias (como la Unión Europea), mientras que las segundas han llevado a la desaparición de algunos de los Estados multinacionales previamente existentes, como fueron los casos de las antiguas Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. De ahí que me parezca acertado utilizar esos términos

*Las tendencias centrifugas exógenas: un enfoque lógico-histórico*

Ya es un lugar bastante común en el pensamiento crítico y descolonizado, el reconocimiento que, dentro de las múltiples *fuerzas centrifugas endógenas* y *exógenas* que condujeron a la frustración de los ideales de El Libertador Simón Bolívar y de otros próceres de las luchas contra el colonialismo español de «ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria», a la progresiva balcanización de «la América antes española», a sus muchas veces conflictivas interacciones con Brasil y a la prolongación hasta la segunda mitad del siglo XX del «orden colonial» instaurado sobre la mayor parte de los territorios del llamado «Caribe insular» hay que incluir, en un lugar destacado, las diversas estrategias desplegadas por los gobiernos permanentes y temporales de diversas potencias colonialistas, neocolonialistas e imperialistas y, dentro de ellas, en

para referir aquellas fuerzas o tendencias que propician o dificultan la necesaria «integración económica y política» de los 33 Estados independientes actualmente existentes en América Latina y el Caribe. En razón del espacio disponible solo me referiré a aquellas «fuerzas centrifugas» que tienen una etiología exógena; pero sin desconocer que otras tienen un origen endógeno; como son los intereses de las clases dominantes y de ciertos sectores subalternos que, por diferentes razones, no han estado, ni están identificados con la necesaria unidad de Nuestra América.

primer lugar, la de los Estados Unidos de América.<sup>2</sup>

Luego de culminar su expansión territorial hacia el oeste y el sur de sus fronteras originales, al menos desde fines de la década de 1890, los gobiernos de esa última potencia imperialista avanzaron sin prisa, pero sin pausa en la consolidación de su dominación sobre Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, en el desplazamiento o la distribución de sus «esferas de influencia» en el hemisferio occidental con Francia, Gran Bretaña y Holanda, así como en la elaboración de diversas «alianzas asimétricas» con los representantes políticos, económicos, militares e ideológico-culturales de las clases dominantes en la mayor parte de los Estados independientes o semiindependientes de América

<sup>2</sup> En la literatura marxista, siempre se ha diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento su carácter socio-clasista, el primero alude a lo que se denomina «la maquinaria burocrática-militar» y los diferentes aparatos ideológico-culturales que garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente, esa diferenciación fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Para ellos, el «gobierno permanente» estaba integrado por «los grupos de poder y poderes fácticos», mientras que los «gobiernos temporales» surgían de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo.

Latina y el Caribe.<sup>3</sup> Expresión y a la vez complemento de esas alianzas fue la progresiva institucionalización, ampliación y profundización de la Unión Panamericana (oficialmente fundada en 1910) y, después de culminada la Segunda Guerra Mundial, del Sistema Interamericano.

En razón del virtual poder de veto que casi siempre han tenido los representantes del gobierno estadounidense en el funcionamiento de los principales órganos político-militares de ese «sistema» —la Junta Interamericana de Defensa (JID) y la Organización de Estados Americanos (OEA)—, desde su institucionalización en 1942 y 1948, respectivamente, hasta la actualidad estos sólo han respaldado aquellos proyectos de concertación política, cooperación funcional e integración económica entre los gobiernos de sus Estados Miembros que hayan sido percibidos como funcionales a los intereses geoeconómicos, geopolíticos y estratégicos de la llamada «potencia hegemónica en el hemisferio occidental».

Aunque desde los primeros años de

---

<sup>3</sup> El concepto «Estados semiindependientes» fue acuñado por Vladimir Ilich Lenin en su célebre obra *El imperialismo: fase superior del capitalismo*. Con ese término se refería a los Estados nacionales o plurinacionales que, luego de haber obtenido su independencia política y, en algunos casos, económica, en las condiciones del «capitalismo monopolista» volvieron a caer bajo la férula de la oligarquía financiera: sujeto socio-económico dominante en las principales potencias imperialistas.

las décadas de 1950 hasta el comienzo de la década de 1990 existían diversos elementos que así lo demostraban,<sup>4</sup> esa proyección se hizo totalmente evidente a partir de la última década del siglo XX. En esos años, los representantes políticos, económicos, militares e ideológico-culturales, estatales y no estatales, de la oligarquía financiera estadounidense, en consuno con sus principales aliados o subordinados hemisféricos se empeñaron en la institucionalización de «un nuevo orden panamericano» funcional a la recomposición de su multifacético sistema de dominación —hegemonía, acorazada por la fuerza— sobre el continente americano.

Por consiguiente, ese «orden» también estuvo orientado a dirimir a su favor las contradicciones que entonces se le estaban presentando a los grupos dominantes en Estados Unidos con los de las demás potencias integrantes de «la tríada del poder mundial» (Japón y

---

<sup>4</sup> Entre ellos, el abierto rechazo de los gobiernos de Estados Unidos a la fundación del llamado Grupo ABC (Argentina, Brasil y Chile), así como la sibilina oposición de las autoridades estadounidense al Mercado Común Centroamericano (MCCA), a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), al Pacto Andino, a la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), al Sistema Económico Latinoamericano (SELA), al Grupo de Cartagena, al Grupo de Contadora, al Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, al igual que a los esfuerzos de diversos gobiernos de Brasil orientados a consolidar un Pacto entre los Estados que comparten la Cuenca del Río Amazonas.

la entonces recién fundada Unión Europea), así como a someter a «las disciplinas» del denominado Consenso de Washington a los gobiernos de todos los Estados partícipes en los diversos procesos de concertación política, cooperación funcional e «integración económico-comercial» previamente existentes: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, el Pacto Andino y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Igualmente a los gobiernos de los Estados latinoamericanos y caribeños que, de manera simultánea, se incorporaron a «los procesos integracionistas» que se fundaron en los primeros años de la década de 1990 bajo los auspicios del ecléctico «regionalismo abierto» impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); cuáles fueron los casos de las Cumbres Iberoamericanas, del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Esta última conformada por todos los gobiernos de los Estados independientes o semiindependientes del denominado Gran Caribe, al igual que con la participación con el estatus de observadores de los representantes de todas las potencias europeas (Francia, Gran Bretaña y Holanda) que todavía

conservan diversos territorios coloniales en esa región.

En consecuencia, desde 1998, la OEA se transformó, por primera vez en su historia, en la Secretaría Ejecutiva de todos los acuerdos multilaterales, tanto en los campos políticos y económicos como de seguridad que fueron adoptándose en las Cumbres de las Américas (cuya primera cita se realizó en Miami a fines de 1994 y la más reciente en Cartagena de Indias, Colombia, en abril del 2012) y, en particular, de las intensas negociaciones que comenzaron a desarrollarse con vistas a lograr, a más tardar en el 2005, la suscripción por parte de los gobiernos de 34 de los 35 Estados del hemisferio occidental del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsado por las administraciones de William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009).<sup>5</sup>

Paralelamente se fue produciendo la progresiva «subordinación» de la JID a la OEA. Esta se formalizó en el 2006 con el propósito de relegitimar el que he llamado «ALCA militar» para connotar la continuidad de las reuniones de Jefes de Ejército, Marina y Aviación, así como de las Cumbres de Ministros de Defensa, de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA, por su acrónimo en

<sup>5</sup> De esos acuerdos siempre estuvieron excluidos los sucesivos gobiernos de la República de Cuba.

el leguaje oficial de la OEA) y de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), al igual que las diversas maniobras militares multilaterales que —bajo la égida de los órganos militares estadounidenses (en particular del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas)— se han desplegado y continúan desplegándose en diversos países de América Latina y el Caribe.

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que la frustración del ALCA —protocolizada en la IV Cumbre de las Américas realizada en Argentina, en el 2005— no impidió que la «segunda presidencia» de George W. Bush (2005-2009) continuara impulsando diversos tratados bilaterales o plurilaterales de libre comercio con diversos gobiernos latinoamericanos orientados a lograr la «integración neoliberal y subordinada» de esos Estados a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos. Así, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (firmado entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México a comienzos de la década de 1990), en el segundo lustro de la primera década del siglo XXI se agregaron los Tratados de Libre Comercio (TLC) signados, de manera separada, con Chile, Colombia, Panamá y Perú, al igual que, de forma colectiva, con los gobiernos de República Dominicana y de todos los Estados integrantes del SICA.

Estos TLC, al igual que los diversos acuerdos de defensa y seguridad suscri-

tos por los gobiernos de esos países con Estados Unidos objetivamente han fortalecido su dependencia estructural y funcional hacia esa potencia imperialista y, por tanto, potenciado las *tendencias centrífugas endógenas y exógenas* que han actuado y siguen actuando sobre los Estados Miembros de la CARICOM, del SICA, de la Comunidad Andina (CAN) y del MERCOSUR. También han entorpecido la profundización de los acuerdos de otras organizaciones de concertación política y cooperación del sur político del continente americano, cuáles han sido los casos de la OLADE, de la ALADI, del SELA y del ahora extinto Grupo de Cooperación y Concertación de Río Janeiro: antecedente inmediato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fundada a fines del 2011.

En la fundación de esa última organización de concertación política y de cooperación en ciertas esferas de la actividad social desempeñaron un importante papel los ocho gobiernos latinoamericanos y caribeños que en ese momento integraban el ALBA-TCP y de los cuatro Estados que entonces formaban parte del MERCOSUR. Estos lograron concitar el apoyo de los gobiernos de los demás Estados Miembros de la UNASUR, al igual que de todos los Estados centroamericanos y caribeños integrantes de PETROCARIBE fundada en el 2005 con el auspicio del entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), Hugo Chávez.

*Las estratagemas de la primera presidencia de Barack Obama*

Con vistas a «renovar y prolongar a lo largo del siglo XXI» el mal llamado «liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental», así como a tratar de «contener», ralentizar o descarrilar los proyectos de integración latinoamericanos y caribeños mencionados en los dos párrafos anteriores, la primera presidencia de Barack Obama (2009-2013) cohonestó los golpes de Estado «institucionales» que se produjeron en Honduras y Paraguay en junio del 2009 y del 2012 respectivamente. También estrechó todos sus compromisos estratégicos bilaterales o multilaterales (políticos, económicos, militares y el terreno de la seguridad) con los gobiernos permanentes y temporales de México, de la mayoría de los Estados centroamericanos (incluido los de Belice y Panamá), al igual que con los de República Dominicana, Colombia, Perú y Chile. Estos tres últimos integrantes —junto al gobierno de México— de la Alianza del Pacífico; finalmente institucionalizada en junio de 2012.

Como se ha denunciado, esa alianza (articulada con el Tratado Transpacífico que está impulsando el actual gobierno estadounidense con vistas a «contener» los desafíos que le plantea a su «hegemonía» en la región Asia Pacífico el fortalecimiento de la República Popular China y del llamado Grupo de Cooperación de Shanghái) también persigue debilitar la influencia que han

venido adquiriendo en los asuntos internacionales, hemisféricos y suramericanos los actuales gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, la RBV y, sobre todo, de Brasil. Este último integrante del llamado Grupo BRICSA (también conformado por los gobiernos de Rusia, la India, la República Popular China y Sudáfrica) e impulsor, desde el 2003, de diversas estrategias orientadas a transformarse en «una potencia global», así como a fortalecer con tal fin su influencia económica y política en Bolivia y Paraguay, al igual que en diversos países del continente americano bañados por el Océano Pacífico, al igual que por el Mar Caribe.

Por consiguiente, a las tendencias centrífugas ya señaladas en los párrafos anteriores hay que agregar las diversas dificultades que está confrontando el MERCOSUR (en particular con los gobiernos de Paraguay y, en menor medida, de Uruguay), las debilidades internas que aún tiene la UNASUR y los asimétricos Acuerdos de Asociación con la Unión Europea (UE) firmados por México, Chile, Colombia y Perú, así como por todos los gobiernos integrantes del SICA. Igualmente, los llamados Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) con la UE firmados hace cuatro años por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los 14 Estados independientes o semiindependientes que conforman la CARICOM. También las diversas obligaciones asumidas por sus cancilleres

durante «la reunión informal» que el 10 de junio del 2010 sostuvieron en Barbados con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

En esta última reunión se adoptaron diversos acuerdos en el terreno económico-comercial dirigidos a implementar el llamado «Compromiso de Bridgetown: Asociación para la Prosperidad y la Seguridad». Como parte de éste, los participantes en ese conclave respaldaron todos los acuerdos adoptados durante el Dialogo sobre la Cooperación en Asuntos de Seguridad entre EE.UU. y el Caribe (en el cual también participaron representantes de la República Dominicana), que se había efectuado en Washington desde el 27 de mayo del 2010. Esos diálogos estuvieron y están económicamente sustentados en la llamada Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBIS, por sus siglas en inglés) impulsada por la administración de Barack Obama.

Por consiguiente, siguiendo algunos de los anunciados y prácticas de la «nueva alianza de las Américas» impulsada por esa administración en esos compromisos también se incluyeron diversos acuerdos vinculados a la Cooperación y a la Asistencia para «la reconstrucción de Haití», a la cooperación mutua en el terreno de la seguridad energética, así como en diversas áreas vinculadas al cambio climático y a la salud pública. Igualmente, a la extensión, hasta el año 2020, de los acce-

sos preferenciales al mercado estadounidense de los productos caribeños incluidos en la llamada Ley de Asociación Comercial del Caribe aprobada por la actual administración estadounidense en abril del 2010.

Tal ley incorpora el virtual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Haití (conocido con «la Ley HOPE»: *Haitian Opportunity for Economic Enhancement*) que previamente había sido prorrogado hasta el 2018 mediante los acuerdos establecidos entre el entonces presidente de Haití, René Préval (2006-2011), y la administración de Barack Obama. Como se sabe, esta ha seguido respaldando el virtual «protectorado» instaurado en ese país por el antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU y, amparado en sus resoluciones, por la MINUSTAH (capitaneada por las fuerzas armadas brasileñas) tanto antes, como después de la tragedia humanitaria causada por el sismo del 12 enero del 2010.

Todo lo antes dicho fortalece la multifacética dependencia estructural y funcional del Caribe insular y continental a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la potencia hegemónica en el hemisferio occidental: elementos que, en mi consideración, están en la base de la llamada «crisis de gobernabilidad» que viene afectando a la CARICOM y de las grandes dificultades que continúa encontrando la implementación del Mercado y la Economía Única Caribeña (CSME, por sus

siglas en inglés) acordado desde el año 2000. Estas se han potenciado a causa de la creciente subordinación de sus políticas de seguridad a las exigencias de la burocracia político-militar y policial estadounidense. También de la constante participación de las fuerzas militares y policiales de esos países en las múltiples maniobras militares que, con diferentes nombres y objetivos «tácticos», han venido desplegando las fuerzas militares y de seguridad norteamericanas en su «tercera frontera». En algunas de esas maniobras también han participado las fuerzas militares de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y, en particular, las de Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda. Estas últimas cuatro potencias aún mantienen en el continente americano 18 territorios sometidos a diversas formas de dominación colonial.

En la percepción de la Casa Blanca, del Pentágono y del poderoso Departamento de Seguridad de la Patria (HSD, por sus siglas en inglés), a la articulación de «su» espacio de seguridad en el Gran Caribe también tributan —además de los referidos acuerdos firmados con la CARICOM— la Iniciativa Mérida (orientada a financiar «la criminal guerra contra las drogas que, desde el 2006, se ha venido desplegando en México) y la Iniciativa para la Seguridad Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés) aceptada por todos los gobiernos de los Estados Integrantes

del SICA, al igual que por los de Belice y Panamá. También tributan los FOL del SOUTHCOM instalados desde el año 2000 —con la anuencia de la monarquía constitucional holandesa— en Aruba y Curazao. Igualmente las denominadas «Instalaciones de Seguridad Cooperativa» (CSL por sus siglas en inglés) que ya dispone ese comando en Bahamas y en la República Cooperativa de Guyana. Asimismo, la base naval que, con ayuda del Pentágono, están instalando las fuerzas armadas de República Dominicana en la estratégica Isla Saona.

Aunque, según la información difundida, en esa base no permanecerá personal militar estadounidense, su funcionamiento le permitirá a la Marina de Guerra dominicana (y, por tanto, a la estadounidense) tener una presencia permanente en esa área, así como «monitorear las actividades ilícitas» que se desarrollan en el Canal de la Mona, ubicado entre la parte oriental de la República Dominicana y la parte occidental del archipiélago de Puerto Rico. Por consiguiente, esa base interactuará con todas las capacidades que conservan la Marina de Guerra y la Guardia Nacional de Estados Unidos en ese colonizado archipiélago, al igual que en la mal llamada Base Naval de Guantánamo, Cuba.

Estas —al igual que las FOL y las SCL que tienen dislocadas en otros territorios del Gran Caribe— se «triangulan» con los mandos y efectivos del

SOUTHCOM y de la Cuarta Flota de la Marina de Guerra estadounidense, encargada de la vigilancia y «protección» de las «aguas azules» (océanos), «aguas verdes» (litorales) y «aguas marrones» (fluviales) que bañan las costas norte, nororientales u oriental de casi todos los Estados del Caribe insular, al igual que de la RBV, de la República Cooperativa de Guyana, de Surinam, de la todavía llamada Guyana francesa (Cayena), así como de Argentina, Brasil y Uruguay.

Esto último —al igual que las nuevas FOL o en SCL que se han venido fortaleciendo o instalando en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como los controvertidos acuerdos de defensa y seguridad firmados de manera bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica— contribuyen a explicar la reacción adversa que el despliegue de esa flota ha encontrado entre buena parte de los gobiernos de los Estados integrantes del ALBA-TCP y de la UNASUR. Sobre todo porque según diversos analistas (incluido el autor de estas páginas), la ralentización de los acuerdos de esa última organización (incluidas las labores de su Consejo de Defensa y de su Consejo Económico), la mediatización de los fundamentos jurídico-político-institucionales de la recién fundada CELAC y el debilitamiento de los acuerdos PETROCARIBE y ALBA-Caribe forman parte de los objetivos estratégicos que han perseguido y persiguen las diversas «strate-

gia inteligentes» que desplegó la «primera administración» de Barack Obama contra los pueblos y las naciones de Nuestra América y en particular contra los gobiernos integrantes del llamado «núcleo duro» del ALBA-TCP.

Así lo demuestran, entre otras evidencias, la perduración del bloqueo económico, comercial y financiero, así como de otras acciones agresivas del gobierno estadounidense contra el pueblo y el gobierno cubano encabezado, desde el 2008, por Raúl Castro. Igualmente, la hostilidad oficial estadounidense contra los gobiernos de Bolivia y Ecuador, presididos por Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente; los frustrados intentos de Estados Unidos y su aliados europeos de deslegitimar el resultado de las elecciones generales realizadas a fines del 2011 en Nicaragua en las que resultó reelecto por un amplio margen de votos el presidente Daniel Ortega; y las constantes conspiraciones del gobierno permanente y del actual gobierno temporal estadounidense, así como de sus «aliados» internos (organizados en la mal llamada Mesa de Unidad Democrática) dirigidas, primero, a evitar la reelección del presidente Hugo Chávez en los comicios presidenciales que se realizarán en la RBV el 7 de octubre del 2012 y, luego de su desaparición física, a deslegitimar la elección del candidato presidencial del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, en las elecciones de igual carácter efectuadas el 14 de abril

del 2013.

En la percepción de los gobiernos permanente y temporal de Estados Unidos, la derrota de ese mandatario significará un golpe contundente a los diversos acuerdos de concertación política, cooperación funcional e integración económica que, utilizando sus inmensos recursos energéticos y su «renta petrolera», ha venido impulsando la RBV con el propósito de edificar un «mundo multipolar», de debilitar el sistema de dominación estadounidense en el hemisferio occidental, de impedir nuevos avances en la institucionalización del ya mencionado «orden panamericano», así como de impulsar un «modelo» de desarrollo económico, social, político e ideológico-cultural (identificado con las aún imprecisas nociones del «socialismo del siglo XXI») alternativo a los dictados de la «globalización neoliberal» y al capitalismo periférico, semiperiférico y dependiente instalado en la mayor parte de los Estados de América Latina y el Caribe.

*La política hemisférica de la «segunda presidencia» de Barack Obama.*

A partir de todos los elementos antes mencionados y de otros excluidos en beneficio de la síntesis, al igual que del análisis de la correlación de fuerzas existentes entre los principales sujetos y «actores» gubernamentales y no gubernamentales, internos y externos, que continuarán actuando en el sur político del continente americano, considero

que en el futuro previsible se mantendrán las tendencias centrifugas exógenas y endógenas referidas en los párrafos anteriores. Por tanto, estas continuarán interactuando de manera compleja y en muchas casos negativa sobre la mayoría de los «procesos integracionistas» que se están desarrollando en Nuestra América.

Mucho más porque cualquier que sea la evolución en el mediano plazo de las superpuestas crisis que están afectando a la socio-economía europea y estadounidense, así como de «la hegemonía» global y hemisférica de esa potencia imperialista, las diversas fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e ideológico-culturales que controlan sus gobiernos permanente y temporal, así como el funcionamiento de su sistema político continuarán contando con el poder necesario para defender sus principales intereses estratégicos, geoeconómicos y geopolíticos en el hemisferio occidental. Y, como ya está dicho, esos intereses son contrapuestos a los de todos aquellos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, latinoamericanos y caribeños que han venido impulsando diversos proyectos de concertación política, cooperación funcional e integración económica diferentes a los subordinados proyectos «panamericanos» y de «libre comercio» impulsados por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Por ende, el debilitamiento de esos proyectos seguirá guiando las diversas

estrategias, más o menos «inteligentes», que desplegará la administración de Barack Obama durante su «segunda presidencia». Así lo indican, entre otros elementos que no tengo espacio para detallar, la política de defensa hacia el hemisferio occidental hasta el año 2023 difundida por el ex secretario de Defensa Leon Panetta en octubre del 2012 y los resultados de la visita oficial realizada por Obama a México, al igual que de la reunión que sostuvo en San José de Costa Rica con los mandatarios del SICA a comienzos de mayo del presente año. Aunque colocando la «cooperación económica» por encima de la que ha venido ofreciendo en el terreno de «la seguridad», en esta reunión, al igual que en mencionada visita a México, se comprometió a mantener los fondos que en los años previos le había venido entregando a «la «guerra contra las drogas» que se desarrolla en ese país, así para continuar la implementación de la CARSI. Según la información difundida, aunque esos fondos son menores a los de los años precedentes, estos ya están incluidos en los presupuestos de «ayuda externa» (militar y civil) para el 2014.

A lo antes dicho hay que agregar los propósitos hegemónicos de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe definidos públicamente por el vice-presidente de Estados Unidos Joseph Biden ante la reunión del Consejo de las Américas efectuada en Washington a comienzos de mayo del pre-

sente año. También los resultados de las visitas que realizó unos días después a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. A pesar de las contradicciones que se expresaron en la reunión que efectuó en el primero de esos países con todos los Jefes de Estados y Gobiernos de la CARICOM (en la cual participó el actual presidente de la República Dominicana, Danilo Medina) en ésta se profundizaron los acuerdos en el terreno económico y comercial, así como en el campo de la seguridad de la Cuenca del Caribe incluidos en el ya mencionado «Compromiso de Bridgetown» y en los diálogos sobre Asuntos de Seguridad que sistemáticamente se han venido realizando desde el 2010.

Del mismo modo que en su visita a Colombia, Biden estrechó los vínculos estratégicos existentes entre el actual gobierno temporal de su país y el encabezado por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos. Así lo demuestran el compromiso de Biden de mantener la voluminosa ayuda económica y militar (estimada en 8 500 millones de dólares) que —desde la aprobación del Plan Colombia en 1999 hasta el 2012— su país le ha venido ofreciendo al gobierno permanente y a sucesivos gobiernos temporales colombianos. También su anuncio de que la administración de Barack Obama respaldará la incorporación de Colombia a la «primermundista» Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al igual que en las intensas

negociaciones que se están desplegando con vistas a protocolizar antes del fin de este año el ya referido Tratado Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).

A cambio, el mandatario colombiano se comprometió, entre otras cosas, a sostener los diversos acuerdos político-militares y económico-comerciales previamente firmados con Estados Unidos, así como a favorecer las interacciones del gobierno de esa potencia con la referida Alianza para el Pacífico institucionalizada en junio del 2012. Merece resaltar que esos y otros propósitos también estuvieron presentes en los intercambios que sostuvo el presidente Barack Obama durante su ya mencionada visita oficial a México, así como durante las visitas oficiales que en junio del presente año realizaron a Estados Unidos los presidentes de Chile y Perú, Sebastián Piñera y Ollanta Humala, respectivamente. Aunque no se conocen los detalles, con ambos mandatarios la actual administración estadounidense firmó diversos acuerdos orientados a consolidar «su hegemonía» en América del Sur, al igual que en la región Asia-Pacífico.

Por otra parte, durante su primera visita oficial a Brasil, Biden continuó avanzando en la consolidación y ampliación de los diálogos y acuerdos de alto nivel que, desde el 2010, se han venido realizando y firmando con el gobierno presidido por Dilma Roussef. A pesar de las dificultades que le causó la denuncia del extendido espionaje elec-

trónico que ha venido realizando Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) sobre diversos países del mundo, esos propósitos también estuvieron presentes en las primeras visitas oficiales realizadas a Colombia y Brasil por el actual Secretario de Estado, John Kerry. Según la información difundida, en la primera de esas visitas logró disipar «las molestias» del gobierno colombiano; mientras que en la segunda, a pesar de la decepción que causó su acérrima defensa de esas actividades de espionaje realizadas por la NSA, Kerry continuó dando pasos orientados a preparar la visita oficial que, en octubre de este año, realizará la antes mencionada mandataria brasileña a los Estados Unidos.

En ésta se ha previsto la suscripción de cinco nuevos acuerdos bilaterales y, por tanto, que se profundicen los Diálogos de Alto Nivel entre los gobiernos de ambos países que se han venido efectuando desde el 2010. Según indicó públicamente en ese año el ex director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, en su perspectiva esos diálogos estaban orientados, entre otras cosas, a utilizar al gobierno brasileño para «contener» a los gobiernos «anti-estadounidenses» instalados en diversos países de América Latina y el Caribe; en particular a los de Hugo Chávez y sus aliados.

Cualquiera que sea la validez de esa afirmación, en mi consideración las fu-

turas interacciones de los gobiernos de Estados Unidos con los de Brasil estarán orientadas a evitar que los representantes políticos, económicos, militares e ideológico-culturales de la llamada «nueva élite brasileña» (formada durante los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores) continúen avanzando en los diversos planes políticos, económicos y militares que han venido elaborando con vistas a transformar ese país en una «potencia global» autónoma de los intereses estratégicos, geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos y de sus principales aliados asiáticos y europeos en diferentes regiones del mundo y, en particular, del hemisferio occidental.

#### *A modo de conclusión*

Sin dudas, en caso de que la administración de Barack Obama logre esos propósitos, se fortalecerán las fuerzas centrífugas que en los años más recientes han limitado (aunque no impedido) la paulatina profundización del MERCOSUR y de la UNASUR con todas las implicaciones negativas que esto tendría para los demás procesos de concertación política, cooperación e integración económica que de manera independiente a los Estados Unidos se están desplegando en el sur político del continente americano. Mucho más porque todo parece indicar que —a pesar de los acciones emprendidas por John Kerry durante la Asamblea General de la OEA realizada en Guatemala con vistas a

«normalizar» sus relaciones con el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro— en los próximos años se mantendrá la hostilidad de la actual administración estadounidense hacia los gobiernos de los 10 Estados ahora integrantes del ALBA-TCP y en especial hacia los de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la RBV.

Paralelamente, el último gobierno temporal de Barack Obama, junto a sus principales aliados o subordinados hemisféricos y extra hemisféricos continuarán impulsando o apoyando diversas iniciativas dirigidas a entorpecer aquellos acuerdos de la AEC, del SICA, de la CARICOM, de PETROCARIBE, del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC que sean percibidos como desfavorables a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de las clases dominantes, de la poderosa burocracia político-militar estadounidense, así como de aquellos sectores de su sociedad y su sistema político que continúan pensando que América Latina y el Caribe siguen siendo «su traspatio» o —como descarnadamente indicaron a comienzos de la década de 1980 los redactores del primer documento de Santa Fe— «el escudo y la espada de la proyección del global estadounidense».

De ahí la validez de lo planteado por el actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba y actual presidente *pro tempore* de la CELAC, Raúl Castro: «Tendremos que cuidar nuestra unidad dentro de la diversidad

e impedir que se nos divida. Sabemos que la consolidación de esta organización enfrentará recios obstáculos, derivados del injusto e insostenible orden internacional, [de] la crisis económica global, [de] la agresiva política de la

OTAN, [de] las amenazas y consecuencias de sus guerras no convencionales y el intento de un nuevo reparto del mundo; [de] la existencia de enormes arsenales nucleares y novedosas armas, así como [del] cambio climático».

## BIBLIOGRAFÍA

- Suárez Salazar, Luis y Gloria Amézquita (compiladores) (2013) *El Gran Caribe en el siglo XXI: Crisis y respuestas*, CLACSO, Buenos Aires.
- Suárez Salazar, Luis (2011) «El Gran Caribe: una mirada prospectiva de su coyuntura política» en el libro *El Caribe en el siglo XXI: coyunturas, perspectivas y desafíos*, de Milagros Martínez y Jacqueline Laguardia (compiladoras) Editorial de Ciencias Sociales de La Habana.
- Suárez Salazar, Luis (2011a) *La contraofensiva plutocrática-imperialista contra las naciones y los pueblos de nuestra América: algunas anticipaciones*, 17 de marzo, Servicio Informativo «Alai-amlatina».
- Suárez Salazar, Luis (2011b) «Contraofensiva plutocrática-imperialista contra nuestra América», en el libro *América Latina en tiempos de Bicentenario* Felipe Pérez Cruz (coordinador) Editorial de Ciencias Sociales de La Habana.
- Suárez Salazar, Luis (2011c) *Historia política y económica de América Latina*, Cuaderno de Textos, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social de la República Bolivariana de Venezuela.

